

ESTRATEGIAS CONTRASUBVERSIVAS FRENTE A LA DISIDENCIA ESTUDIANTIL ANTIFRANQUISTA

Sergio Rodríguez Tejada

Introducción

Los medios represivos utilizados por un régimen constituyen potencialmente un fértil campo de estudio. En primer lugar, pueden proporcionar información de primera mano sobre las dinámicas del aparato gubernamental, sean éstas de tipo interno —como, por ejemplo, su capacidad para adaptarse a nuevas circunstancias y desafíos inesperados—, o de tipo externo, como las relaciones de colaboración en temas de seguridad con otras administraciones. En segundo lugar, ofrecen una imagen relevante sobre qué sectores —y en qué grado— son considerados por los detentadores del poder como verdaderos disidentes. En tercer lugar, indican hasta qué punto esos elementos hostiles son percibidos en cada momento como una amenaza real para el orden establecido. Finalmente, si reparamos en las consecuencias que sobre sus adversarios tiene la intervención de los agentes gubernamentales, podemos sopesar las características de la disidencia y la influencia que en su propia evolución llega a ejercer el Estado.

Sin embargo, a menudo el acceso a este campo de estudio presenta barreras nada despreciables para el investigador, que tropieza con opacidades y boicots más o menos deliberados, tales como archivos desaparecidos, o cuya existencia sencillamente es negada; documentación vedada con la excusa de proteger los derechos individuales de antiguos perseguidos y similares. Esos obstáculos resultan tanto mayores, cuanto los hechos en cuestión puedan tener implicaciones políticas; y cuanto más informales e ilegales hayan sido los procedimientos empleados contra la disidencia. Hay además factores ideológicos que operan en contra del interés científico. Una cierta inercia lleva a dar por supuesta la existencia de tales hechos, al tiempo que se descarta que sea posible desarrollar una investigación seria sobre los mismos. No ha sido infrecuente que la voluntad analítica sobre estas cuestiones haya sido estigmatizada como fruto de una espuria “teoría de la conspiración”; o, peor aún, descalificada como una mera voluntad revanchista contra políticos —quizás todavía vivos, e incluso en activo— de gobiernos o regímenes anteriores.

Buen ejemplo de estas consideraciones es el caso de la dictadura franquista. Su pervivencia desde la segunda mitad de los años treinta hasta mediados de los setenta se debió en buena medida a la amplia utilización que sus sostenedores hicieron de una gran variedad de métodos represivos contra la población desafecta, desde la planificación de la eliminación física del adversario de los primeros años, hasta el sutil recurso a los servicios de

inteligencia en su última etapa, sin que ello fuese incompatible con el constante recurso a la brutalidad policial. Aunque con las diferencias esperables entre regímenes de naturaleza muy diversa, ese ascenso de unas nuevas tecnologías de la contención de la disidencia a partir de mediados de la década de los sesenta no se produjo de manera aislada, sino en el marco de las políticas “contrasubversivas” que la Administración estadounidense y sus aliados llevaron a cabo durante la guerra fría en los años centrales del siglo XX, de manera simétrica a los métodos utilizados por sus enemigos soviéticos en su propia esfera de influencia.

Como ha señalado el profesor Pere Ysàs, la erupción en los años sesenta de un potente movimiento estudiantil en las universidades españolas —dentro de un marco de protesta internacional que suele resumirse en la etiqueta de “mayo del 68”— encarnó a la perfección la fobia de los dirigentes franquistas a “la subversión” como resurgimiento de todo aquello que el Movimiento Nacional había pretendido destruir para siempre. Y representó, en consecuencia, un estímulo fundamental en esa modernización represiva de la dictadura que, en parte, absorbió novedades externas, y, en parte, actualizó medios que ya había empleado en el pasado. Partiendo de ese supuesto y del fundamento empírico de una reciente tesis doctoral sobre el nodo valenciano del movimiento universitario antifranquista (con todas las reservas derivadas de la diversidad de ritmos y experiencias entre distritos), esta comunicación se centra en los recursos empleados para combatir la protesta juvenil, explorando la situación previa al fenómeno —con especial referencia al ámbito académico donde surgió—, los cambios represivos cuya presencia indujo y, finalmente, las consecuencias que tuvo en el propio movimiento y en otros sectores de la disidencia.¹

La gestión de la disidencia universitaria antes del movimiento estudiantil

La depuración política a la que fue sometida el ámbito universitario en la inmediata posguerra garantizó la erradicación de toda desafección y permitió que le fuese encomendada la misión de formar intelectual y políticamente a los herederos del régimen. En ambas tareas las autoridades académicas contaron con la aquiescencia del nuevo estamento profesoral y con la colaboración de una organización de encuadramiento estudiantil que pertenecía al Movimiento Nacional: el SEU. A mediados de los años cuarenta hubo aislados intentos de resistencia, entre los que destaca la efímera reconstrucción de algunos sindicatos republicanos anteriores a la guerra civil, como fue el caso de la FUE. Al margen de esto, durante quince años los centros de enseñanza superior se caracterizaron por sus exhibiciones de adhesión al Caudillo. Aunque los diversos servicios

¹ La tesis, dirigida por el profesor Ismael Saz Campos, es: Sergio RODRÍGUEZ TEJADA, *Dictadura franquista y movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia (1939-1975)*, Valencia, Universitat de València, 2006.

de inteligencia no dejaron de estar vigilantes, los falangistas críticos atrajeron buena parte de su atención, por cuanto que eran peones dentro de una partida política franquista en la que su bando llevaba la peor parte.

Diversas agencias de información operaban de forma paralela y no siempre coordinada: la policía política o Brigada de Investigación Social, los Servicios de Inteligencia Militar (Servicio de Inteligencia del Ejército, Servicio de Inteligencia Naval y su equivalente de la Fuerza Aérea), el Servicio de Inteligencia de la Guardia Civil y los servicios de información del propio Movimiento. Éstos incluían a su vez una red de colaboradores más o menos informales, integrados en su mayor parte por ex combatientes: desde organizaciones como la Guardia de Franco y el Somatén rural, hasta ocupantes de puestos de trabajo que —como los serenos, estanqueros, taxistas, porteros de fincas y otros oficios— debían algo a la confianza personal y a la influencia política. Eran los ojos y oídos del régimen; y llegaban hasta lugares donde la apariencia de formalidad legal vedaba el acceso a las fuerzas de orden público convencionales.

Las contradicciones en el SEU —que ya se habían hecho patentes, entre otras ocasiones, en la huelga de tranvías de Barcelona en 1951— estallaron de manera aparatosa a mediados de los años cincuenta en Madrid, cuando diversos incidentes precipitaron la declaración en 1956 del primer Estado de excepción de la historia del régimen, en lo que fue, según ha señalado el profesor Miguel Ángel Ruiz Carnicer, el mayor golpe recibido hasta ese momento por la dictadura desde el interior del país. Esto dice mucho del éxito que hasta ese momento había tenido el franquismo en el mantenimiento del orden público. Como analizó hace tiempo Manuel Ballbé, la legislación franquista ordinaria ya era excepcional por sí misma, dado que la jurisdicción militar predominaba en última instancia sobre la civil. Pero, en todo caso, la reacción de las autoridades revelaba no solamente su alarmismo y su sensibilidad hacia el papel político de la universidad, sino también su intención de presentarse como un régimen normalizado, sin renunciar por ello al recurso a la violencia como argumento fundamental.

Como de hecho sucedió con otros muchos asuntos, el propio Franco y los miembros del Gobierno no podían obviar el precedente de la dictadura de Miguel Primo de Rivera y el desgaste que sufrió como consecuencia de las movilizaciones protagonizadas por la FUE. En los años siguientes fueron adoptadas una serie de medidas preventivas contra un hipotético crecimiento de la contestación estudiantil. Sin embargo, el descontento entre los jóvenes universitarios —oculto durante muchos años bajo las apariencias de pasividad y desinterés hacia lo político— estaba comenzando a cuajar en pequeños núcleos de disidentes, que ya no tenían experiencia personal de la guerra civil y para los que los sucesos de 1956 habían representado todo un estímulo. Algunos acabaron dotándose de siglas propias, como la ASU, el FLP y en Valencia el socialismo nacionalista.

Igual que las células universitarias del PCE —que, al menos en este último distrito, respondían a una dinámica propia—, al principio estos grupos reprodujeron las viejas estrategias de resistencia propias de la clandestinidad de los años anteriores. Otros, en cambio, aprovecharon la coartada cultural y participativa que ofrecía ahora la universidad para poner en práctica unas nuevas estrategias de oposición, basadas en la lucha desde dentro, semejantes a las que estaban ensayando entre los trabajadores las incipientes Comisiones Obreras.

Los grupúsculos políticos antifranquistas eran desarticulados en cuanto sus actividades eran detectadas y quedaban identificados sus componentes. Sin embargo, no todos recibieron el mismo trato. Habitualmente, los detenidos por cuestiones políticas eran torturados, al menos, en función de cuatro variables de lógica práctica: su sexo (había una cierta protección paternalista hacia las mujeres), el grupo político en el que militaban (la persecución se ensañaba con los militantes comunistas), su origen familiar (su adscripción política y su posición social) y el puesto que les atribuían en la organización (cuanto más sospechaban que sabían, más los golpeaban). Los varones comunistas de familia modesta que ocupaban posiciones dirigentes tenían una alta probabilidad de recibir un grado de tortura mayor, como el que implicaban las descargas eléctricas que continuaban siendo habituales en los interrogatorios de los dirigentes obreros varones. Con ciertas variaciones —como, por ejemplo, la irrupción de los grupos armados antifranquistas y el endurecimiento represivo de la fase terminal del régimen—, estos parámetros pueden aplicarse a las prácticas policiales de la última fase de la dictadura.

Durante más de dos décadas los diferentes sectores de la coalición franquista se las arreglaron para dirimir sus propias disputas internas, mientras mantenían bajo su control a los desafectos. Aunque éstos realizaron diversos intentos organizativos —esperando todavía restablecer la legalidad republicana en los años cuarenta, buscando un futuro más allá de Franco en los años cincuenta—, durante todo el periodo bastó para contenerlos la utilización de los medios represivos tradicionales: los filtros políticos y académicos, las agresiones de las fuerzas de choque falangistas y de los cuerpos de seguridad; y, en casos extremos, la detención y la tortura. Las tornas cambiaron rápidamente en los años siguientes y muy pronto el poder establecido se vio obligado a buscar nuevos medios con los que intentar contener la marea de descontento que se había levantado en las universidades.

El desafío del movimiento estudiantil

El desarrollo de una movilización de masas en las instituciones académicas superiores en torno a reivindicaciones de autoorganización estudiantil y participación democrática resultó, como ya se habían temido

años antes las autoridades del régimen, un problema de naturaleza muy diferente a todo aquello con lo que se habían acostumbrado a tratar. En una España en la que las condiciones internas y externas eran muy diferentes a las existentes en los años treinta, el recurso a una violencia y un terror sistemáticos, como los aplicados entonces, ya no era una opción viable para combatir frontalmente a una disidencia juvenil, de ambos sexos y de clase media; que se expresaba en un lenguaje contemporizador, utilizaba medios exclusivamente pacíficos, contaba con el apoyo de destacados miembros del profesorado y gozaba de una creciente simpatía internacional. Por más que no se dejase en ningún momento de intentar presentarlos en los medios de comunicación como víctimas de los engaños de la conspiración comunista internacional, lo cierto es que el Gobierno vaciló durante mucho tiempo en la respuesta que debía dar al desafío del movimiento estudiantil. Desde la primera vez que el asunto fue tratado en el Consejo de Ministros, con ocasión del escándalo suscitado por la carga policial contra una marcha pacífica encabezada por cuatro profesores en Madrid en febrero de 1965, las consideraciones de imagen pesaron mucho para frenar la tentación de dar un escarmiento como los de antaño.

En la política franquista a este respecto siempre se manifestó una contradicción básica. Por un lado, los consejeros más inteligentes del dictador recomendaban la conveniencia de moderar y atraerse a los disidentes, como de hecho se intentó, de forma notablemente insincera, en marzo de 1965 con los activistas madrileños convocados en el parador de Villacastín. Después de haber sido utilizado durante años como material de sacrificio, en 1965 el Gobierno liquidó el SEU y lo reemplazó por unas Asociaciones Profesionales de Estudiantes (APE) que otorgaban un modelo de organización gremial pretendidamente autónoma y despolitizada, pero que en realidad quedaba bajo la supervisión de las autoridades académicas. Su escaso éxito hizo que las APE fueran reformuladas como Asociaciones de Estudiantes (AE) en 1966, en 1968 y otra vez en 1974, sin que por ello dejaran de utilizarse al principio las siglas anteriores. Así pues, los estudiantes podían apuntarse el tanto de haber conseguido acabar con una organización del aparato franquista, si bien no cabe olvidar que la desaparición del sindicato falangista —reducido al pecio burocrático de la Comisaría para el SEU— también estaba relacionada con las disputas internas del régimen.

Por otro lado, las jerarquías franquistas no podían resistirse al deseo de desacreditar a los jóvenes contestatarios ante la opinión pública para aplastarlos más fácilmente. En los años siguientes la legislación de orden público y los poderes represivos de las autoridades académicas fueron progresivamente endurecidos. La inconsecuencia de las autoridades —que, incapaces de decidirse por una de las dos estrategias, acabaron aplicando las dos simultánea o alternativamente— las privó aceleradamente de toda legitimidad ante la mayoría

de los estudiantes. Anteriormente las sucesivas promociones de universitarios, como la mayor parte de la población, habían llegado a asumir la normalidad cotidiana de la existencia de un régimen al que muchos ni siquiera veían como una dictadura. En ellos, como en muchos otros sectores del país, estaba muy extendida la opinión de que si alguien era detenido por la policía, sería porque “algo habría hecho”. El trato cada vez más rudo dado a las manifestaciones escolares, las entradas de “los grises” en los recintos universitarios, las declaraciones de Estado de excepción (particularmente las de 1969 y 1970-1971, que afectaron directamente al movimiento estudiantil), la utilización de técnicas de tortura en los interrogatorios policiales y las arbitrariedades judiciales —a menudo con repercusión internacional, como ocurrió, por ejemplo, con los procesos de Burgos de 1970— dieron argumentos a los líderes universitarios, que denunciaban la situación política y llamaban a los jóvenes a hacer algo al respecto. En la medida en que la brutalidad represiva e indiscriminada creó un conflicto cognitivo incluso en los estudiantes más despolitizados, contribuyó no poco a cohesionar la unidad estudiantil. Entre 1965 y 1968 los activistas antifranquistas recogieron la aspiración general a un asociacionismo democrático y propusieron, como alternativa a las APE, el proyecto de un Sindicato Democrático de Estudiantes (SDE) de ámbito estatal. La constitución del SDE de Barcelona en la famosa “Caputxinada” de Sarriá en 1966 y la convergencia de todos los representantes democráticamente elegidos —APE-AE y pro-SDE— denunciando el filibusterismo del régimen en la I Reunión Coordinadora y Preparatoria (RCP) celebrada en Valencia a principios de 1967, fueron los dos grandes hitos del movimiento estudiantil democrático de los años sesenta.

Es interesante constatar que un observador externo se adelantó al Gobierno franquista en la previsión de que era necesario buscar otras vías de cooptación de los disidentes españoles. Dicho agente fue la Administración estadounidense y la anticipación fue posible porque no hacía más que extender a España una política que ya estaba siendo aplicada en otros países de su área de influencia como parte de las estrategias de la guerra fría. Aunque hay antecedentes previos, fue a partir de la firma de los acuerdos hispano-norteamericanos de 1953 cuando la intervención de los servicios secretos del aliado occidental pudo llevarse a cabo de manera más sistemática. Como observó Joan Garcés, los incidentes de 1956 fueron inmediatamente analizados por el Departamento de Estado, con la tranquilizadora conclusión de que “no representan una amenaza a la estabilidad del régimen de Franco, pues no implicaban [*sic*] la defección de los grupos clave”.

No obstante, la cada vez más avanzada edad del dictador y la alarma que pronto suscitaron amenazas a los intereses estratégicos de EEUU —como las revoluciones argelina y cubana— llevaron a sus servicios de información a elaborar planes para supervisar la fuerza y la orientación política de la oposición española. Aparte

de diversos ejemplos de propaganda cultural, resulta particularmente interesante la concesión de becas del American Field Service (AFS) y del programa de intercambios People to People a estudiantes de bachillerato y universidad españoles desde mediados de los años cincuenta. El objetivo era que estos jóvenes pasasen una temporada en Estados Unidos para apreciar de primera mano las ventajas del sistema político y económico vigente en la superpotencia. En la primera mitad de los años sesenta, justo cuando el movimiento estudiantil emergía como una fuerza a considerar, el programa del AFS dio un giro para centrarse fundamentalmente en la universidad, reclutando a través de las legaciones diplomáticas a activistas estudiantiles demócratas, con excepción de los comunistas. Al menos en Valencia hay constancia de que el personal encargado de dicha labor estaba relacionado directamente con los servicios de inteligencia de su país.

Desde los años cincuenta la CIA venía financiando indirectamente a diversas organizaciones de voluntarios —como las mencionadas— que operaban en el extranjero, como parte de una ambiciosa estrategia de promoción de la imagen de la superpotencia y de captación de elementos colaboradores en otros países. Entre los grupos objeto de especial atención, se encontraban los estudiantes de enseñanza media y superior. Tanto el AFS como la Asociación Nacional de Estudiantes (NSA) norteamericana fueron utilizados conjuntamente para estos fines. Desde 1956 el Programa de Liderazgo de Estudiantes Extranjeros seleccionaba anualmente en cada país en el que operaba a quince estudiantes extranjeros para que viajasen a Estados Unidos, donde pasaban un año estudiando o viajando. Otros recibían becas limitadas a un mes durante el verano. El programa se realizaba en el marco del AFS y en teoría era impulsado y sufragado por la NSA, que se hacía cargo de los visitantes durante su estancia. Sin embargo, los fondos procedían en realidad de la Fundación para los Asuntos de la Juventud y los Estudiantes (FYSA), una tapadera filantrópica supuestamente privada e independiente, mediante la cual la CIA cubría un 80% de los gastos de la NSA y financiaba, de paso, a la Conferencia Internacional de Estudiantes (CIE), alternativa occidental a la prosoviética Unión Internacional de Estudiantes (UIE).

Muestra de hasta qué punto los líderes estudiantiles que participaron en esos viajes a Estados Unidos tenían conciencia de vivir en un mundo bipolar es que no dudaban que efectivamente se trataba de una tapadera de la CIA para orientarlos ideológicamente, entre otras cosas por las facilidades que daban para ello las autoridades franquistas, que —por intercesión de la embajada norteamericana— concedían permisos temporales de viaje a estudiantes a los que había retirado anteriormente el pasaporte a causa de sus actividades sindicales. Pero ello no les impidió involucrarse, ya que los consideraron una oportunidad para divulgar la auténtica situación política existente en España y obtener apoyo para su causa. Cuando en 1967 la revista

Ramparts—editada en Berkeley por jóvenes activistas de izquierda— desató un escándalo político al revelar el control que la CIA venía ejerciendo sobre la NSA y la financiación que había proporcionado a la CIE, la noticia causó una sorpresa relativa, más por el alcance de la larga mano de Washington, que porque se ignorase la existencia de maniobras como esa. Lo cierto es que en 1965, durante una reunión en Ámsterdam, la NSA había utilizado diversos subterfugios para negarse a contribuir económicamente a la ayuda que la CIE había otorgado a la Confederación Universitaria Democrática Española (CUDE), probablemente porque sabían de la presencia de activistas comunistas en esta última. Por otra parte, como un símbolo del apoyo exterior a la causa sindical democrática en España, en la Caputxinada de 1966 habían estado presentes y habían hecho uso de la palabra el secretario general de la CIE y el presidente de la NSA, que más tarde fue identificado como agente de la CIA.

La opción contrasubversiva

Tanto las autoridades norteamericanas, como también las del propio régimen franquista, asumieron pronto que era necesario instrumentar una tercera vía de intervención entre la represión pública y la cooptación descarada. La causa de este cambio de rumbo fue, obviamente, la evidencia de que ambas políticas —más allá de la captación de determinados individuos— estaban fracasando desde el punto de vista de la imagen, ya que no hacían sino fomentar la radicalización de los activistas y reforzar los vínculos que éstos habían establecido con el conjunto del estudiantado. El resultado fue una apuesta de los poderes establecidos por las estrategias informales de actuación en el medio universitario, lo que implicaba un protagonismo cada vez mayor para los servicios de inteligencia. Como antes se ha avanzado, esta decisión debe ser contextualizada en un panorama internacional de los años sesenta marcado por el desafío que suponía para el viejo orden bipolar —y, en particular, para el prestigio de la superpotencia estadounidense— la convergencia entre la fuerte contestación interna de los movimientos estudiantiles que vivieron su apogeo en 1968, por un lado; y por otro, los proyectos revolucionarios del Tercer Mundo, simbolizados por iconos como el “Che” Guevara y la guerra de Vietnam. La reacción franquista no puede ser, por tanto, separada del giro de la propia Administración norteamericana en este campo.

Este nuevo tipo de política adoptó en el medio estudiantil español cuatro modalidades de intervención —obtención de información, impulso de las asociaciones de estudiantes oficiales, reagrupación de los adictos y preparación de fuerzas de choque— que se pusieron en práctica en dos fases sucesivas, cuyo punto de inflexión fue la creación en 1968, expresamente para ese fin, de una nueva agencia de inteligencia dependiente directamente de Presidencia del Gobierno. Durante la primera etapa la recopilación de datos fue confiada a los

servicios que ya venían operando desde los inicios del régimen, en particular los de la Brigada de Investigación Social. En el curso 1965-1966 se comenzó la publicación —para el consumo interno del aparato gubernamental— un *Boletín Informativo de Actividades Estudiantiles* que, como una suerte de versión negativa de las publicaciones disidentes, daba cuenta unas ocho veces al mes de los sucesos acaecidos en la universidad. Uno de sus apartados fijos era la “Sección de Antecedentes”, en la que se iba confeccionando un registro detallado de activistas, con el propósito de facilitar su control y su posterior castigo. También se elevaban diversos trabajos puntuales, como, por ejemplo, un *Nomenclatur* [sic] *de las organizaciones estudiantiles políticas*, afectas y contrarias, que actuaban en las universidades.

Los activistas tenían claras dificultades para evitar que la policía conociese sus planes. En marzo de 1965 el Servicio de Inteligencia Militar disponía de una copia de los acuerdos adoptados en la I Reunión Coordinadora Nacional de Estudiantes inmediatamente después de haberse realizado. Las estrictas medidas de seguridad tomadas en la preparación de la reunión fundacional del SDEUB de 1966 no pudieron evitar que la policía conociese diez días antes que probablemente se celebraría en un local de una orden religiosa. Antes de que hubiesen transcurrido dos horas desde el inicio de las sesiones, la policía ya había acordonado el recinto. A pesar de las precauciones adoptadas, la policía se las arregló para averiguar los nombres de los presentes —y todo lo que hablaron— en el encuentro previo a la I RCP de Valencia, que tuvo lugar en el Conservatorio de Música de Madrid. Todo ello sugiere que había confidentes y/o infiltrados entre ellos, o en su círculo inmediato.

Independientemente de los fondos entregados por el Ministerio de Educación a las APE-AE para financiar su política de atracción del estudiantado moderado, la reagrupación de los estudiantes afectos al régimen estaba encomendada a la Delegación-Comisaría para el SEU, que todavía conservaba competencias asistenciales y complementarias que, como los Colegios Mayores, las organizaciones deportivas o el Servicio Universitario de Trabajo (SUT), le permitían tener un acceso privilegiado a un sector importante de los universitarios. Estos espacios eran coto reservado para los servicios de información del Movimiento y fueron utilizados para reclutar candidatos que integraran las candidaturas oficiales de las APE-AE en las diversas Facultades, ya que éstas tenían altas probabilidades de quedar desiertas en la mayor parte de los centros, si el proceso era dejado al arbitrio de los propios jóvenes. Con la colaboración de las autoridades académicas, la Comisaría para el SEU también realizó un seguimiento de los resultados electorales en los diversos distritos, constatando el panorama desolador que ofrecían para los intereses del régimen.

Como instrumento de castigo complementario a la represión legal que ejercían las fuerzas de orden público y parcial sustituta del papel que habían ejercido antaño los falangistas, en el curso 1962-1963 se fundó en Madrid Defensa Universitaria (DU), organización de extrema derecha que actuaba como fuerza de choque —a menudo bajo orientación policial— contra los activistas de izquierdas. La Brigada Social hacía referencia a sus “tendencias moderadas hostiles a los grupos marxistas e izquierdistas” y valoraba su actividad diciendo que “no cuenta con gran número de miembros pero viene desarrollando una estimable labor de propaganda y de acción en los medios universitarios (para romper manifestaciones, retirar carteles, anti-propaganda, etc.)”. En esta línea, tenemos constancia del reparto en Valencia en febrero de 1965 de panfletos firmados con siglas apócrifas que atacaban a los activistas demócratas utilizando los argumentos del régimen; y de la actuación de provocadores en Madrid, que fueron denunciados ya entonces por los propios activistas en enero de 1968. Por otra parte, persistieron grupúsculos de falangistas “auténticos”, que se vieron obligados a buscar su propio lugar en el nuevo contexto universitario, como una organización estudiantil más; aunque hay indicios de que existía una cierta porosidad entre ellos y DU.

La explosión contestataria que representó el “mayo francés” y sus equivalentes en otros países a lo largo de 1968 despertó las alarmas en el seno del régimen. A finales de septiembre de 1968 el Ministerio de Educación solicitó al Alto Estado Mayor del Ejército apoyo técnico contra la “subversión” universitaria, con la intención de anticiparse a una situación parecida a la que había vivido el presidente De Gaulle unos meses antes. Para ello se designó un militar con conocimientos sobre los métodos del contraespionaje francés, alemán occidental y estadounidense, José Ignacio San Martín, que pasó en comisión de servicios a Educación. En este Ministerio constaba al frente de un Gabinete de Enlace, que en realidad actuaba como un “servicio especial” de inteligencia especializado en el activismo estudiantil, denominado Organización Contrasubversiva Nacional (OCN), que venía a añadirse a los ya existentes.

A finales de octubre el organismo ya disponía de un plan de acción, denominado en clave “Canadá”. Sin embargo, no adquirió entidad oficial hasta el 16 de diciembre de 1968. Su finalidad básica era contener en lo posible el crecimiento del antifranquismo —en un principio, sobre todo el universitario— y controlar sus posibles derivaciones en el futuro, teniendo en cuenta una eventual crisis sucesoria. Al mismo tiempo, debía contribuir a contener la contestación lo suficiente como para recuperar la iniciativa implantando la reforma universitaria tecnocrática de la Ley General de Educación. En marzo de 1972 un decreto de la Presidencia del Gobierno transformó la OCN en el Servicio Central de Documentación (SECED). El organismo de información

pasaba a depender directamente del vicepresidente Carrero Blanco. El cambio supuso una mejora en los medios financieros y técnicos disponibles, que incluyeron adiestramiento en técnicas contrasubversivas en Israel y EEUU. También se incrementó la ambición de sus objetivos: ETA y las conspiraciones internas del régimen.

Inicialmente los métodos de la OCN se centraban fundamentalmente en dos ámbitos complementarios: la obtención de información y el boicoteo del activismo de izquierdas. El primer apartado incluía el refuerzo y aprovechamiento de las redes de informantes ya existentes; el acopio y estudio de toda la documentación disponible; la infiltración en el movimiento estudiantil y sus organizaciones de agentes propios y el reclutamiento de confidentes y “señaladores” entre los estudiantes. El segundo aspecto —inseparable del anterior— suponía la utilización de todos estos medios para entorpecer y distorsionar en lo posible la labor opositora en la universidad, introduciendo divisiones internas entre los activistas, interrumpiendo asambleas, facilitando “caídas” y fomentando acciones violentas sin sentido —por ejemplo, mediante agresiones ultraderechistas— para justificar la represión y desacreditar a los disidentes.

Este último extremo se vio favorecido por la tendencia general del movimiento a abandonar la lucha estrictamente no violenta, pero también influyó de manera relevante en ese cambio, en la medida en que la mayoría de esos manejos no pasaron desapercibidos y confirmaban las visiones más extremistas sobre la situación política existentes entre los militantes, entre los cuales fueron *vox populi*. La obsesión por ahondar en la clandestinidad, que tantas energías consumió durante los años siguientes en las organizaciones de la nueva izquierda revolucionaria, no fue en absoluto ajena al temor a que observadores inconvenientes, o incluso infiltrados, arruinaran sus proyectos: los sumarios policiales estaban llenos de referencias a “fuentes” sin identificar. Aunque a menudo se trataba de observaciones realizadas por los propios “sociales”, nunca se podía estar seguro de que se trataba de simples paranoias. Como ya se ha visto en el capítulo anterior, estas estrategias de guerra encubierta no eran nuevas, pero recibieron en ese momento un nuevo impulso, gracias al interés que despertaron en el vicepresidente Carrero Blanco.

Hacia el cambio de década, el trabajo llevado a cabo en la universidad por los servicios secretos franquistas estaba dando sus primeros frutos. Contaban con el apoyo de diversas instituciones del régimen y habían establecido estrechas relaciones con los servicios secretos franceses e italianos, para aprender de sus experiencias de la lucha antisubversiva en ambos países, intercambiar información (vigilancia de activistas en el exilio) y traspasarse agentes (infiltraciones cruzadas de un país a otro). Las agencias de noticias Cifra y Pyresa fueron utilizadas para difundir versiones de los incidentes en la universidad que fuesen favorables al Gobierno.

Según el que fue su director, el teniente coronel San Martín, a finales de mayo de 1970 la Organización Contrasubversiva Nacional disponía de trescientos ochenta elementos (infiltrados e informantes) de ambos sexos trabajando en diversas ciudades. A partir de 1972 el SECED alcanzó unos doscientos agentes y unos cinco mil colaboradores de ambos sexos: unos dos mil eran directos y unos quinientos, meros informantes.

Un manual de autodefensa de amplia circulación a principios de los años setenta advertía que “ochocientos jóvenes de ambos sexos, con edades que oscilan entre los 18 y los 24 años fueron entrenados por agentes americanos de la CIA en Madrid en el verano de 1969. Hoy están esparcidos por toda España, principalmente por las Universidades, medios intelectuales y ambientes de la oposición”. Conformaban, señalaba esta fuente, un “cuerpo de policías espías, cuya misión consiste en infiltrarse en las organizaciones políticas y sindicales”. Ponía como ejemplo la caída “de un conocido partido político” —se trataba del Partido Comunista de España (internacional)—, en la que “un policía-estudiante infiltrado en el Comité Central” había hecho “arrestar en Madrid a los principales dirigentes del grupo reunidos en Asamblea Nacional”. Quizás exageraban, pero lo cierto es que el Servicio de Información Militar (SIM), que actuaba en la universidad y controlaba a los activistas durante el servicio militar, constituía una copia de la inteligencia militar del Pentágono y contaba con la presencia de asesores estadounidenses. Según Jesús Ynfante, la OCN fue considerada ya entonces por algunos analistas como una mera filial local de la CIA.

De hecho, tenemos pruebas documentales de que en la caída de la organización universitaria del PCE en Valencia, que tuvo lugar en abril de 1971, estuvieron implicados al menos tres confidentes policiales, que proporcionaron datos precisos sobre la actividad de diversos activistas, gracias a su presencia en el entorno inmediato de los mismos, incluyendo en un caso la participación en una reunión colateral; y en otro la recepción de un paquete con propaganda por parte de uno de los propios confidentes. Posteriormente esa información fue pasada a la Brigada de Información Social, que la utilizó —junto con fuentes de su propia cosecha— para elaborar los expedientes políticos que las autoridades académicas valencianas utilizaron en 1973 para prohibir la matrícula en la universidad a más de trescientos estudiantes de ambos sexos.

Cuando la OCN tomó bajo su control las nuevas AE creadas en 1968, éstas experimentaron un relativo avance. Por otra parte, desde el curso 1968-1969 existía una Asociación Nacional de Universitarios Españoles (ANUE), creada por la OCN como organización estudiantil franquista que pudiera actuar como alternativa política frente a los grupos de izquierda. En febrero de 1970 salió su órgano *ANUE*, con una tirada de diez mil ejemplares, que se elevó a quince mil en el curso siguiente. La ANUE contaba con una sólida financiación a

cargo del Estado, pero además comenzó a recibir jugosas donaciones privadas que desgravaban fiscalmente, gracias a que Educación reconoció su carácter “benéfico-docente” en junio de 1970. También gestionaba una red de cooperativas de libros, discos y artículos deportivos. Ello debía ayudarle a articular su propio discurso (actos de desagravio, himnos, símbolos) y a proteger a la “juventud sana estudiantil” de la “contaminación marxista”.

Además de las labores de información, probablemente fue la preparación y financiación de grupos violentos el principal éxito de la OCN en esos años. Era mucho más fácil actuar sobre los ultras que influir sustancialmente en la mayoría estudiantil, como mínimo, recelosa de todo lo que proviniese del régimen. Como ha estudiado Xavier Casals, el reclutamiento se adaptó en cada distrito a las condiciones existentes. En Madrid la OCN creó la Asociación Universitaria Nacional (AUN), heredera directa de Defensa Universitaria. En Barcelona AUN no tuvo éxito y se optó por financiar a colectivos ya existentes, situados entre el neofascismo y el ultraderechismo nostálgico, como el Frente Sindicalista Revolucionario (FSR), el Partido Español Nacional Socialista (PENS) y lo que quedaba de la Guardia de Franco. El PENS tenía un grupúsculo hermano en Madrid, denominado Militantes Nacional Revolucionarios (MNR): era una escisión pronazi de una organización más amplia, liderada por uno de los símbolos del llamado “búnker” franquista, el notario y procurador en Cortes Blas Piñar: Fuerza Nueva (FN), que había sido fundada en 1966. Otro grupo ultraderechista de carácter paramilitar, Guerrilleros de Cristo Rey (GCR), también fue relacionado en esa época con FN, la Guardia de Franco, la Brigada Social y los servicios secretos franquistas. Durante el Estado de excepción de 1969 atentaron ya contra “curas obreros” bajo los lemas “¡Viva Cristo Rey!” y “¡Viva Franco!”.

Por su parte, el FSR contaba con cierta implantación en Valencia. Uno de sus militantes autóctonos más destacados era un antiguo director del SUT. Además de financiar a ese grupo, la sección local de la OCN también llevó a cabo durante ese curso una tarea de captación en el Centro Doctrinal *José Antonio* y entre estudiantes ultraderechistas de Filosofía y, sobre todo, de Derecho. A partir de esas gestiones y bajo el control de la OCN surgió en la segunda mitad del curso el Movimiento Social Español (MSE), cuyo nombre y simbología se inspiraban en el neofascismo del Movimento Sociale Italiano (MSI). Las siglas AUN y PENS también fueron utilizadas en Valencia, a veces en las mismas acciones y escritos que reivindicaba el MSE, lo que confirma que existía una estructura común de sostenimiento que, como apunta Casals, fue negociada previamente. A diversas alturas del curso 1969-1970 fueron lanzados en los centros universitarios numerosos panfletos que se dirigían a los estudiantes en un lenguaje peculiar y formulaban acusaciones de manipulación contra los dirigentes estudiantiles, que ya entonces hizo sospechar sobre la identidad de sus autores. En algunos casos efectuaban

propuestas reformistas, que pretendían oponerse por igual a la dictadura y a los izquierdistas. Merece la pena recordar que una de las directrices de la OCN era presionar a las autoridades —especialmente al Ministerio de Educación— para que atendiesen las peticiones de los estudiantes más moderados y así quitar argumentos a la “subversión”. No era extraño a sus procedimientos atacar simultáneamente a izquierdistas y a ultras para rechazarlos como dos propuestas políticas igualmente extremistas y contrarias a los intereses de los españoles.

En Valencia, tras algunos tanteos previos en forma de agresiones aisladas y con retraso respecto de otros distritos, en el curso 1971-1972 la violencia ultraderechista irrumpió con decisión en el espacio universitario. Poco a poco sus agentes habían ido ocupando posiciones en el distrito, hasta el punto de que uno de ellos había sido legitimado como representante estudiantil oficial por el Rectorado. Comenzaron a aparecer pintadas amenazadoras del MSE en las Facultades y, a juicio de los antifranquistas, se dejaban sin borrar deliberadamente. Los jóvenes ultras —todos varones— exhibían su musculatura de gimnasio y sus cabellos cortos, como contraste con las melenas y las barbas propias de la estética “progre” de sus rivales. No era extraño verlos departiendo con los “sociales”. Penetraban en las Facultades con puños de hierro y cadenas, dedicándose a arrancar carteles y a provocar a los estudiantes, que los abucheaban. Al menos en una ocasión el líder del MSE exhibió una pistola en el claustro de la Universidad de Valencia, ante la indiferencia policial. Envalentonados, declararon la Facultad de Derecho “zona Nacional” y desalojaron de ella una asamblea izquierdista en medio de una brutal batalla campal. Un intento semejante en Filosofía tuvo mucho menos éxito, pero las agresiones ultras no hicieron sino incrementarse en los años posteriores. Antes de que acabase ese curso el coche del padre de un conocido activista voló por los aires como consecuencia de un atentado ultraderechista. Al año siguiente le tocó el turno a librería valencianista *Tres i Quatre*, cuyo escaparate saltó en pedazos como consecuencia de una carga explosiva. Se inauguraba así una estrategia de tensión que la extrema derecha utilizó durante la transición.

Conclusiones

Como puede verse, la dictadura franquista se vio obligada a actualizar sus recursos represivos para hacer frente al movimiento estudiantil, al mismo tiempo que resolvía sus propias tensiones internas. Durante la primera mitad de los sesenta el Gobierno utilizó todo tipo de recursos, legales e ilegales, violentos y pacíficos, para debilitar, dividir o, al menos, desviar la movilización de los jóvenes. El intento de simultanear una política de palo y otra de zanahoria arrojó en general un resultado nefasto y no hizo sino confirmar el discurso de denuncia que los activistas estudiantiles dirigían a sus compañeros para intentar que tomaran conciencia de cuál

era la verdadera naturaleza de "el Régimen". La propia intervención norteamericana tuvo mayor éxito a nivel individual, aunque en general sirvió para confirmar la desconfianza hacia los poderes establecidos.

Durante la segunda mitad de los sesenta y principios de los setenta se reforzó la retroalimentación entre el endurecimiento y la sofisticación de los medios represivos, por un lado; y la radicalización de las posiciones disidentes, por otro. En España, igual que el desmantelamiento del SEU estuvo relacionado con la ofensiva de Carrero Blanco contra las posiciones falangistas, la diversificación de los medios de actuación contra "la subversión" se debió también a su influencia, hasta el punto de crear *ex novo* un organismo bajo su control como punta de lanza contra los nuevos adversarios del régimen. Esta estrategia pudo apuntarse tantos importantes, a los que no fue ajena, ni la ayuda extranjera, ni la aportación de los cuadros franquistas más jóvenes.

La modernización represiva contribuyó a alargar la vida del régimen y mantener a raya, aunque ya solamente fuese por unos años más, la contestación que bullía en la sociedad y que se estaba manifestando con claridad en muchas universidades y fábricas. Más allá de su alarmismo, o precisamente a causa de él, la reacción oficial demuestra que la joven oposición le estaba haciendo mella, porque ponía en cuestión la justificación básica de la dictadura como mantenedora de la paz y el orden: un orden y una paz que quedaban desmentidos, no tanto por las protestas, como por la brutalidad contra las mismas. El despliegue de violencia para combatir las generales ansias de libertad, legitimó el giro extremista y la simpatía con que la violencia era vista por muchos miembros de la oposición en los últimos años de la dictadura. Al mismo tiempo, la capacidad para infiltrar e intervenir en la disidencia ofreció a los servicios de inteligencia instrumentos de acción que resultaron muy útiles en ese momento y también en los decisivos años posteriores.